

## BRUNO HNOS. S.C. Y OTRO V. ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS

*CONSTITUCION NACIONAL: Control de constitucionalidad. Facultades del Poder Judicial.*

La declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como "ultima ratio" del orden jurídico.

*CONSTITUCION NACIONAL: Control de constitucionalidad. Facultades del Poder Judicial.*

Sólo cabe formular la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal, cuando un acabado examen del mismo conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados.

*DEPRECIACION MONETARIA: Principios generales.*

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que redujo la multa aplicada por la Administración Nacional de Aduanas fundándose en la inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 21.898, toda vez que la actualización allí prevista no hace a la multa más onerosa sino que mantiene el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento.

*ADUANA: Penalizaciones.*

Resulta susceptible de ser actualizada por depreciación monetaria la multa aplicada por la Administración Nacional de Aduanas, en la medida en que los efectos de dicha actualización no alteren la relación entre la cuantía de la sanción y el valor de la mercadería que sustenta la determinación de la multa.

*ADUANA: Penalizaciones.*

No resulta congruente ni justo admitir que el valor asignado a una mercadería contrabandeada sea menor, a los efectos de calcular la multa correspondiente, que el reconocido a mercancía lícitamente entrada al país, a los fines del pago del derecho aduanero.

*ADUANA: Penalizaciones.*

No resulta congruente que quien ha sido condenado como autor de una infracción no reciba sanción alguna por efecto de las distorsiones económicas que él mismo contribuye a producir violando las obligaciones fiscales y aduaneras pertinentes.

*ADUANA: Penalizaciones.*

El art. 10 de la ley 21.898 no es inconstitucional, pues la actualización monetaria de multas aplicadas por la comisión de delitos aduaneros -aun dispuesta por ley posterior al hecho- no implica un agravamiento de la situación del infractor (Voto de los Dres. Rodolfo C. Barra, Augusto César Belluscio y Enrique Santiago Petracchi).

*ADUANA: Penalizaciones.*

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 21.898, en cuanto manda actualizar el importe de las multas que debieron imponerse en primera instancia administrativa o judicial con posterioridad a su entrada en vigencia, por ilícitos aduaneros cometidos con anterioridad a dicha fecha o a la vigencia de la ley 21.898 (Disidencia de los Dres. Ricardo Levene (h.) y Antonio Boggiano).

## FALLO DE LA CORTE SUPREMA

Buenos Aires, 12 de mayo de 1992.

Vistos los autos: "Bruno Hnos. S.C. y otro c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso de apelación".

Considerando:

1º) Que contra la sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que, al confirmar el fallo del Tribunal Fiscal de la Nación mantuvo la declaración de inconstitucionalidad del artículo 10 de la ley 21.898, interpuso la Administración Nacional de Aduanas el recurso extraordinario que le fue concedido.

2º) Que la Administración Nacional de Aduanas condenó por diversas infracciones aduaneras a la firma Bruno Hnos. S.C. a abonar una multa proporcional al monto del perjuicio fiscal, que actualizó conforme las previsiones del artículo 10 de la ley 21.898.

3º) Que la firma condenada apeló esa resolución ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Este tuvo por acreditada la infracción pero declaró la inconstitucionalidad de la norma en que se había fundado la actualización

y redujo la multa a la suma de A 0,0261192, lo que fue confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, invocando la doctrina de este Tribunal elaborada a partir del caso que se registra en Fallos: 304:849.

4°) Que en aquella oportunidad la Corte interpretó que el artículo 10 de la ley 21.898 constituía una norma penal *ex post facto* que agravaba la situación del infractor transgrediendo el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal, toda vez que disponía que las multas que debieran imponerse con posterioridad a la fecha de su vigencia por infracciones cometidas con anterioridad debían ser actualizadas.

5°) Que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como *ultima ratio* del orden jurídico (Fallos: 302:1149; 303:241, 1708, entre muchos otros); por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados.

6°) Que en tal sentido, el Tribunal, en su actual constitución, no comparte las conclusiones del antecedente de Fallos: 304:849.

Ello es así por cuanto lo preceptuado en el artículo 10 de la ley 21.898 no importa el agravamiento de la pena prevista para la infracción cometida, toda vez que la actualización allí prevista no hace a la multa más onerosa sino que mantiene el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento (Fallos: 299:146). En otros términos, lejos de agravar la sanción prevista, impide que ésta se desnaturalice.

7°) Que corresponde destacar que las sanciones contempladas para las infracciones aduaneras por las que se condenó en la causa, se encuentran directamente referidas al valor de la mercadería objeto de la infracción. Por eso, el monto nominal en el que la multa, ya determinada, pueda expresarse, resulta susceptible de ser actualizado por depreciación monetaria, en la medida en que por efecto de dicha actualización no se altere la relación

entre la cuantía de la sanción y el valor de la mercadería que sustenta la determinación de la multa.

8º) Que así como "no resulta congruente ni justo admitir que el valor asignado a una mercadería contrabandeada sea menor, a los efectos de calcular la multa correspondiente, que el reconocido a mercancía lícitamente entrada al país, a los fines del pago del derecho aduanero" (Fallos: 288:356), tampoco lo es que quien ha sido condenado como autor de una infracción no reciba sanción alguna por efecto de las distorsiones económicas que él mismo contribuye a producir violando las obligaciones fiscales y aduaneras pertinentes.

9º) Que resta señalar que la validez del artículo 10 de la ley 21.898 ya ha sido sostenida por algunos integrantes de este Tribunal, con fundamentos en igual sentido que los aquí expresados, en el caso que se registra en Fallos: 310:1401, voto de los jueces Augusto C. Belluscio y Enrique Santiago Petracchi.

Por ello, se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y vuelvan los autos al tribunal de origen, para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento (art. 16, primera parte, de la ley 48).

RICARDO LEVENE (H) (*en disidencia*) - MARIANO AUGUSTO CAVAGNA MARTÍNEZ - RODOLFO C. BARRA (*según su voto*) - AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO (*según su voto*) - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (*según su voto*) - JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR - ANTONIO BOGGIANO (*en disidencia*).

VOTO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DOCTOR DON RODOLFO C. BARRA  
Y DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO  
Y DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI

Considerando:

Que los agravios de la recurrente relativos al alcance del art. 10 de la ley 21.898, que motivaron la concesión del recurso extraordinario plantea-

do, tratan cuestiones sustancialmente análogas a las que esta Corte resolvió en el precedente de Fallos: 310:1401.

Por ello, se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y vuelvan los autos al tribunal de origen, para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento (art. 16, primera parte, de la ley 48).

RODOLFO C. BARRA - AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.

DISIDENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LEVENE (H) Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO

Considerando:

Que los agravios de la recurrente relativos a la inteligencia del art. 10 de la ley 21.898 que motivaron la concesión del recurso extraordinario interpuesto, tratan cuestiones sustancialmente análogas a las que esta Corte resolvió en los precedentes de Fallos: 304:849 y 892, entre otros, a cuyas consideraciones cabe remitir en razón de brevedad.

Por ello, se confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso. Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase.

RICARDO LEVENE (H) - ANTONIO BOGGIANO.

---